

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL

Manizales, catorce (14) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

AUTO INTERLOCUTORIO 791

RADICADO: 2021-00254
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: COOTRACHEC
DEMANDADO: HARLISON EDUARDO JERONIMO CASTRILLON
NATALIA VALENCIA ARANGO

Se resuelve a continuación sobre el recurso de reposición formulado por la parte ejecutante contra el auto calendado 03 de mayo de 2021, dentro de la presente demanda **EJECUTIVA**.

ANTECEDENTES

Con la demanda, el acreedor solicitó como medida cautelar el decreto del embargo del 100% de los aportes sociales que poseía el demandado Harlison Eduardo Jerónimo Castrillón en la cooperativa.

Mediante providencia del 03 de mayo avante, este Despacho no accedió al pedimento, considerando que la cautela no se encuentra contemplada dentro de las descritas en el C.G.P. aunado a que, los aportes sociales no integran los bienes personales del demandado, éstos conforman el patrimonio de la cooperativa y son una garantía de las obligaciones contraídas por el integrante, para lo cual el fondo podrá efectuar las compensaciones al momento de su retiro de la entidad, cuando es excluido o fallece, según el procedimiento estipulado en sus estatutos para la devolución. (artículo 49 de la Ley 79 de 1988).

Inconforme con la mencionada decisión, el abogado demandante interpuso recurso de reposición, manifestando que la medida si es procedente toda vez que los aportes son para garantizar las obligaciones que el asociado tiene con la cooperativa, en ese sentido, solo podrán ser gravados en su favor. Además, esta medida es en favor del ejecutado porque amortizaría el capital y los intereses del saldo total, a fin de que no le sumen intereses de mora, pues la misma legislación establece que su retiro por mora solo puede producirse en el momento que se cancela el valor de la deuda o por orden judicial, que sería el momento de aplicar estos dineros.

Para hincar sus argumentos, trajo a colación decisiones de otros despacho judiciales, en los cuales fue decretada la cautela.

CONSIDERACIONES

Se analiza en primera medida que en el presente caso se cumplen las exigencias legales que involucran la interposición de los recursos, previstas en el artículo 318 del Código General del Proceso, en cuanto a la oportunidad para interponerse (dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que se cuestiona) y haberse expuesto las razones necesarias para fundamentar su posición, es decir que fue debidamente sustentado. También se observa que quien lo formula está debidamente legitimado, en virtud al poder conferido por el demandante. Bajo tales condiciones es preciso entrar a debatir el asunto.

Lo primero que pone de presente el juzgado, es que los aportes sociales son definidos por la Superintendencia de economía, como la cuota que entrega el asociado con la finalidad de crear y mantener una organización de patrimonio solidario, cuyo objeto sea la producción o distribución de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados.

Sobre el particular, el artículo 46 de la Ley 79 de 1988 preceptúa que *“El patrimonio de las cooperativas estará constituido por los aportes sociales, individuales y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial”*

A su turno, el artículo 49 ibidem precisa que *“Los aportes sociales de los asociados quedarán directamente afectados desde su origen en favor de la Cooperativa como garantía de las obligaciones que contraigan con ella. Tales aportes no podrán ser gravados por sus titulares a favor de terceros, serán inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en los casos y en la forma que prevean los estatutos y sus reglamentos”*.

En efecto, como bien lo afirma el opositor, los aportes sociales solo pueden garantizar la cooperativa, por lo tanto, dicho argumento lo utiliza el Despacho para indicarle, que esos rubros son garantía de las obligaciones que contraigan los asociados con ella, de manera que esa protección opera de pleno derecho y por ministerio de la ley, y se mantiene mientras se conserve la calidad de asociado, siendo innecesario el decreto de una medida cautelar que lo disponga, esto resultaría redundante con el contenido de la norma, pues a través de esta, es que se protege la economía solidaria convirtiéndolos en inembargables e impidiendo que sean afectados en favor de terceros.

Ahora, como bien lo transcribió el recurrente en su escrito de medidas, citando el concepto 2013034183-001 de la Superfinanciera *“De acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 79 de 1988, si bien los aportes sociales son una garantía de las obligaciones contraídas, solo los jueces de la República pueden adjudicar o liquidar garantías en favor de la parte demandante. El hecho de que se constituya una garantía en favor de una persona no significa que la misma tenga el derecho de disposición en el momento en que se incumple la obligación, ya que, como se explicó anteriormente, solo una orden judicial puede adjudicar dicha garantía a favor del acreedor. Ergo, la entidad no puede abonar los aportes a la obligación; solo un juez podría hacer efectiva la garantía bajo el debido proceso.”*

Lo anterior no significa que para la disposición de los aportes por parte de la cooperativa se deba decretar la medida cautelar de embargo y secuestro de los aportes sino que si bien esos rubros son una garantía de la entidad, esta no tiene la libre disposición de los mismos en el momento en que se incumple la obligación, para ello necesitan que esa garantía se haga efectiva con la adjudicación y liquidación por parte de los jueces de la República en favor de la parte demandante.

Es por esto, que la denegación de la medida cautelar no esta desconociendo los derechos que le asiste a la cooperativa, por el contrario, se reconocen de tal manera que la cautela se aviene innecesaria y redundante al constituirse la garantía en favor de la acreedora por ministerio de la ley.

Ahora, si lo que el ejecutante pretende es que se autorice la disposición de los dineros que constituyen los aportes y sean aplicados a la deuda, esto deberá precisarse para que al momento en que se tenga una decisión de fondo en el sub lite y en caso que salgan avante las pretensiones, se realice lo correspondiente.

Corolario, los argumentos esbozados por el inconforme, no están llamados a prosperar y este Despacho mantendrá la decisión refutada porque la medida cautelar no es procedente en el sub judice ya que la protección y la garantía en favor de la cooperativa sobre los aportes del asociado, opera por ministerio de la ley y no por un embargo que decreta este juzgado para conservar los mismos. Adviértase que tampoco se está poniendo en riesgo la acreencia del demandante, dado que desde una perspectiva legal, no es posible que los asociados dispongan de sus aportes mientras detenten su condición de socios, en la medida en que éstos se encuentran afectados a favor de la cooperativa desde el momento mismo en que fueron constituidos, por tanto, los aportes se conservan en custodia de la entidad solidaria por mandato legal.

Finalmente, en vista de que no se encuentran medidas cautelares pendientes por materializar, se **REQUIERE** a la parte demandante para que adelante las diligencias de notificación del demandado, para lo cual se le concede el término de 30 días, so pena de darse aplicación al artículo 317 del C.G.P. en lo que tiene que ver con la terminación del proceso por desistimiento tácito.

Advirtiéndole que ese sentido, y en atención a la emergencia que atraviesa el país y la expedición del Decreto 806 de 2020, en las citaciones y notificaciones que remita al ejecutante en cumplimiento de esta orden, deberá poner en conocimiento del ejecutado los dos medios de atención virtual que tiene el Juzgado, para que pueda tener comunicación efectiva.

Correo institucional: cmpal06ma@cendoj.ramajudicial.gov.co

Número celular: 320 661 0154.

Por lo expuesto, el JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES,

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER el auto proferido 03 de mayo de 2021, a través del cual no se decretó la medida cautelar de embargo sobre los aportes sociales del demandado Harlison Eduardo Jerónimo Castrillón en la cooperativa demandante.

SEGUNDO: se **REQUIERE** a la parte demandante para que adelante las diligencias de notificación del demandado, para lo cual se le concede el término de 30 días, so pena de darse aplicación al artículo 317 del C.G.P. en lo que tiene que ver con la terminación del proceso por desistimiento tácito.

Advirtiéndole que ese sentido, y en atención a la emergencia que atraviesa el país y la expedición del Decreto 806 de 2020, en las citaciones y notificaciones que remita al ejecutante en cumplimiento de esta orden, deberá poner en conocimiento del ejecutado los dos medios de atención virtual que tiene el Juzgado, para que pueda tener comunicación efectiva.

Correo institucional: cmpal06ma@cendoj.ramajudicial.gov.co

Número celular: 320 661 0154.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

JCB

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3ecfcb44416fbe23c88dd4f44434c733139d429dc268c187dd79d196e6f97c3e**

Documento generado en 14/05/2021 03:13:43 PM